

La Transición, entre historia y presente

The Transition, between History and the Present

Elena Hernández Sandoica

Universidad Complutense de Madrid

¿Qué relevancia consideras que tuvo el protagonismo de Franco en los últimos años de la dictadura y qué importancia cabe atribuir a su muerte en el final del régimen y el comienzo de la Transición?

Son decisivos ambos, tanto la voluntad y decisiones de Franco en las medidas adoptadas (tanto para la sucesión cuanto para reprimir la disidencia) como su desaparición física, una condición necesaria —pero no suficiente— para abrir el país al cambio y abordar la transición política. Tratándose de una dictadura unipersonal, con un grupo cerrado de fieles a su persona y al régimen, contando además con el apoyo masivo del ejército, no parece posible imaginar que la dictadura fuera reformable en una dirección democratizadora mientras Franco viviera, realmente. Hubo actualizaciones a lo largo de la última década de vida del régimen, imprescindibles para ajustar un tanto la marcha del país a los cambios sociales producidos y a ciertas expectativas exteriores. Pero ello no me lleva a compartir interpretaciones de cualquier género de transformación previa como un avance claro de esa Transición que habría de venir, ni entiendo demasiado algunos intentos del pre-

sente por soslayar el cincuentenario de la desaparición del dictador como una fecha importante para el cambio, como el punto de arranque de la transición democrática en cuanto posible y deseable, la configuración considerada matriz del tiempo en que vivimos, sus luces y sus sombras.

De decisiones probadamente personales del dictador procedieron las últimas cinco condenas a muerte de militantes de extrema izquierda solo un mes antes de su desaparición. Ajusticiamientos que marcaron decisivamente el arranque incierto de la transición hacia un régimen que, en principio, solo debería haber mantenido de democracia formal en apariencia, con la figura de un monarca designado por el dictador como jefe del Estado y una clara voluntad continuista. No habría entonces en presencia muchas opciones para la ruptura, puesto que el tiempo del franquismo había sido muy largo y coercitivo, la oposición política se hallaba muy debilitada —y hasta muy al final, solo operaba en el exterior—, y así, había sido en las fábricas, en las calles y barrios, o en las universidades únicamente donde se había hecho frente, entre el final de los años 60 y 1975, a una situación de control social y represión insoportables que

se pagó con alto precio de sangre y cárceles.

Cuestión distinta es en qué proporción y por cuánto tiempo, en función de sus orígenes y su desarrollo posterior —sin justicia reparadora para los vencidos de la guerra, solo investidos de amnistía y «perdón»—, quedaría vivo el régimen de Franco dentro del sistema constitucional y participativo. Toda vez que iría desarrollándose lo que resultaría ser la Transición como un tanteo encadenado de consensos y azares, de renunciaciones y pactos, éxitos y fracasos —a veces desde decisiones arriesgadas—. A partir del referéndum de 15 de diciembre de 1976 y las elecciones generales de junio del 77, estaba claro que el condicionante principal del proceso provenía de la decisión del dictador de perpetuar su propio régimen a través de una monarquía reinstaurada.

¿Qué factores (sociales, económicos, políticos, culturales) crees que resultaron fundamentales en el final del franquismo y en el proceso de cambio posterior? ¿Qué función desempeñaron el movimiento obrero y los demás movimientos sociales? ¿Qué papel tuvo la «cuestión nacional»?

Es difícil contestar en pocas líneas a una cuestión tan compleja, sobre la que tanto se ha escrito y que cubre la historia entera del estado español. En la configuración de una cultura política reivindicativa de derechos sociales fue sin duda elemento de primer orden el crecimiento económico industrializador desde el año 1958 en adelante. Justo entonces comenzaría a perfilarse una acción sindical que, sobre todo a través de las Comisiones Obreras (CC.OO.), sería decisiva en las movilizaciones del final del franquismo y la Transición. A través de ella se lograrían ciertos derechos, paralelos a una mejora en las condiciones de vida que se iría extendiendo hasta chocar con la crisis económica del 73, y contribuyen-

do los obreros decisivamente —junto con los estudiantes y la lucha en los barrios—, a través de todo tipo de manifestaciones y de huelgas (su pico fue en 1976/77), a mantener durante un tiempo la esperanza de lograr un sistema social más ventajoso y participativo. Su papel quedaría seriamente limitado, sin embargo, a partir del severo pacto social en 1977 (Pactos de la Moncloa) que, con un protagonismo acusado de Santiago Carrillo, cedería a los partidos el protagonismo en la cuestión social. Ese papel, con todo, había sido muy activo en la tarea imprescindible de minar el franquismo y configurar una cultura democrática en el sentido extenso, participativo y ciudadano, del concepto. Y por ese motivo, sobre una parte importante de sus actores más decisivos y determinantes había caído la represión policial.

También lo haría sobre el movimiento vecinal y en los barrios, donde las mujeres tuvieron un protagonismo grande en erosionar la afección al régimen —si es que la había—, pero sobre todo en crear conciencia y despertar la réplica, venciendo el miedo. Un papel en la lucha antifranquista con toda probabilidad mucho mayor del que les reconocemos aún hoy —cuando tenemos muchos de sus testimonios y experiencias—. Se estaban viviendo condiciones muy duras en el trasvase de poblaciones enteras del campo a la ciudad, y a esa dureza y penuria de la vida diaria en el trabajo y el hogar fueron muy sensibles, rebeldes, las mujeres, las madres de familia que entraron en la acción política mediante agrupaciones de clase y, en algún caso también —como mujeres de la clase media—, feministas. La cuestión de la legalización del aborto constituye en su caso (más que el divorcio entonces, para las trabajadoras) un punto de inflexión; y contra las mujeres que defendieron su derecho se dio también la violencia política.

Del movimiento estudiantil mucho se ha

escrito a esta hora, y apenas voy a mencionar más que su indudable importancia a mi modo de ver, más allá de protagonismos y episodios concretos, para crear una cultura formalmente democrática —menos quizá en profundidad que en extensión—, también en el sentido de la participación colectiva en la vida profesional y cultural del país, en la interiorización de un sentimiento de ciudadanía compartida.

En cuanto a los nacionalismos periféricos, ello exigiría un desarrollo más completo y particularizado. Su papel resulta indiscutible en las movilizaciones del final del franquismo, tanto en el caso de Catalunya como de Euskadi, con sus diferentes dinámicas de oposición al régimen. (Distintas tanto por su propio pasado histórico como por la postura adoptada en cada caso por las elites económicas reformistas o ajenas al franquismo). Pero más decisiva aún me parece su posición dentro del proceso de democratización tal como quedaría institucionalizado, porque la construcción del estado de las Autonomías dentro de la Constitución del 78 dejaría la cuestión de sus reivindicaciones parcialmente abierta. De modo provisional y tentativo, el apresuramiento de los primeros momentos brindaría al gobierno de UCD —con Suárez como actor decisivo, y Fraga, de AP, como contrapeso en cuanto a las *nacionalidades*— la oportunidad de hacer a un lado a las fuerzas de oposición de izquierdas en ambos territorios (ETA, que había matado ya —aunque no tanto como lo haría después— y Terra Lliure, pero también PSUC y Euskadiko Ezquerria, que estaban muy activos). Optarían, en cambio, por incorporar a las derechas al pacto político del 78, llevando incluso al caso catalán —que no al vasco— una refiguración aminorada de la República mediante la Generalitat y la vuelta de Tarradellas. Fuera del pacto político quedaría asimismo la izquierda independentista canaria (el MPAIAC), con alto grado de represión.

La violencia política desde arriba respondería con creces a la violencia social desde abajo, que también existió. No solo se trató de ETA-m, que crearía un cuerpo para matar uniformados ya en 1975, sino de que, según la población iba escapando al miedo de la dictadura, crecieron las reuniones, asambleas y mítines en fábricas y centros de estudio, a veces en iglesias de *curas obreros...*, ocasión cotidiana a las fuerzas del orden para llevar a cabo una represión arbitraria y sin garantías jurídicas. La sufrirían tanto estudiantes y trabajadores como nacionalistas de izquierdas, homosexuales como gitanos... Ante la violencia del estado no solo crecería la violencia social, sino que se iría extendiendo la sensibilización antifranquista de sectores hasta ahí no politizados. También ellos contribuyeron a aceptar —y enseguida mediante su voto avalar—, con componente grande de ilusión y confianza ciega en el futuro, los cambios positivos —pero también los riesgos— que conllevaba la apresurada reconciliación nacional, el «echar al olvido» sin reparación ni justicia el conflicto civil del 36. Salvo en quienes quedaron en los márgenes del sistema —y unos pocos críticos más, desde dentro de él—, habrían de pasar años hasta que se lamentara la ausencia de memoria y reparación.

¿Consideras que la salida que resultó triunfante en el proceso de cambio postdictatorial era la única posible o existían factores que hubieran podido conducir a otras alternativas?

Si sitúo el punto de mira en lo que fue mi experiencia vivida en esos años, la tentación sería responder aquí ahora que sí había alternativas, o al menos así lo creíamos entonces; pero si el foco alumbra desde hoy, con tantas cosas ya asentadas sobre el proceso, más bien resolveríamos este punto con una negativa, más o menos rotunda o

convencida. Lo cierto es que para muchos de quienes vivimos aquel 20 de noviembre del 75 y el horizonte que se abriría después, nada podría verse con claridad y certeza: la indeterminación y la contingencia irían marcando, vertiginosamente, unas posibilidades y descartando otras, cercenándose pronto la expectativa de una democracia social, un modelo político más radical, presuntamente revolucionario. A gran velocidad se fue configurando un capital político y emocional —*sentimental* de izquierdas— con frecuencia cambiante, tejido de temores y de decepciones cotidianas. Nadie podía saber en realidad, en un día a día plagado de violencias y de incertidumbres, por dónde irían los acontecimientos, y por encima de todo, si triunfaría el búnker antes o después, arruinando el precario andamiaje...

Resultó que solo un sector del régimen —creíamos al principio que pequeño y dispuesto a replegarse— deseaba arriesgarse por el inmovilismo, pero era difícil conocer de entrada su tamaño real y sus prolongaciones. Tardaríamos en tener la certeza de que la monarquía, dispuesta a reafirmarse y sostenerse, hubiera estado de su parte de haber logrado un acuerdo mayor. Personalmente, le doy una gran importancia a ese miedo al retroceso en la aceptación de lo que se habría de convertir nuestra democracia (un miedo «de presente» puro y duro, y no tanto el recuerdo de la guerra civil, en muchos de nosotros, por razones generacionales...). Un miedo que llevaba a la aceptación del consenso y el pacto reformista como una solución, al menos temporal. Y dominaron siempre —al menos hasta avanzados los años 80— la inestabilidad y la incertidumbre, junto con aquel alto grado de violencia y una censura cultural, ya aminorada y un tanto inconsecuente, pero todavía operativa.

Ocurre, sin embargo, que en todo proceso histórico se presentan siempre alternativas, nunca existe una sola salida, aunque a veces no sean factores estructurales sino contingentes los que determinen su evolución. En la España de entonces las pocas alternativas de extrema izquierda existentes fueron pronto bloqueadas hábilmente por los gestores del cambio, ilegalizándose su posible actuación para ayudar a sostener el orden. Y el involucionismo que, por su parte, aspiraba a mantener incólume el edificio del franquismo, también sería frenado finalmente —aunque con mucho esfuerzo, dada la colaboración sin disimulo que prestaba a esos grupos de extrema derecha, muy violentos, una parte del aparato represivo del propio estado, las fuerzas del orden y servicios secretos que habían transitado al nuevo régimen sin depurar—.

Lo que fuera aclamado como un éxito modélico y ejemplar de nuestra transición democrática durante un tiempo, al ser contemplado desde hoy, tiene mucho componente de acierto y pragmatismo en determinadas actuaciones concretas, y de factor-suerte en su combinación y en cuanto a duración a lo largo del tiempo. Lo cual no quiere decir que no se hayan ido revelando, en su desarrollo concreto, carencias sustanciales que, al romperse el consenso, envenenan desde entonces la política sin aparente solución. Por la misma razón, por ese entrecruzamiento entre las pautas del modelo político y su desarrollo histórico, se ha ido procediendo a reevaluaciones diversas de su valor real como tal modelo supuesto. La cuestión más crítica respondería, obviamente, al blindaje de la Constitución y a la inserción en ella de la monarquía, pero también a la insuficiente flexibilidad para dar respuesta a la «cuestión nacional».



Marcelino Camacho interviniendo en la asamblea general de CCOO celebrada en semiclandestinidad en Barcelona en julio de 1976 (Archivo Histórico del PCE - AHPCE).

¿Cómo juzgas la memoria en torno a la Transición y a qué tiene asociada esa etapa la ciudadanía? ¿Qué mitos perviven en torno al proceso?

La Transición sigue siendo para nosotros *política* y no *historia*, a pesar de lo que a mediados de los años 90 del siglo XX pudo creerse (cuando sentenciaba lo contrario el sociólogo Juan Linz). Lo cual significa que su relación con la memoria reciente es confusa, ambivalente y, muchas veces, viene a ser interesadamente manejada por los partidos y los medios de prensa. Sin embargo, la Transición debería estar encuadrada, a estas alturas, en una memoria colectiva que hablara de lo que, sin duda alguna, frente al periodo del franquismo, fueron los éxitos de la incipiente democracia, sin esconder tampoco los muchos costes y las carencias

que entrañó, sus constricciones y estrangulamientos a medio plazo.

La ciudadanía española en general ha estado lejos de demandar ese ejercicio de reflexión colectiva que, en cambio, sí se hizo en otros países al salir de sus respectivas dictaduras. Pero las demandas sociales de memoria, en nuestro país, han sido escasas y, comparativamente, son aún recientes (además, está muy combatida la materialización legal de esa demanda, esas leyes que apuntan a la reparación y la justicia y que solo el PSOE, desde Rodríguez Zapatero, se atrevió a abordar; son muchas las resistencias a ese recuerdo reparador de olvidos desde la esfera de la derecha y la extrema derecha). Ahí reside el que, como sucede con los procesos anteriores con que la Transición conecta (guerra y República, que quedaron ocultas y eludidas en la

propia transición a la democracia, que aparentaba a su vez crecer en el vacío, aislada del pasado reciente, cuando en realidad no fue así, sino que en muchos aspectos contuvo elementos del franquismo), su conocimiento por la ciudadanía siga siendo un asunto pendiente. Una deuda o carencia democrática que, al no haber habido una depuración de aquellos elementos, facilita su reproducción —en el ejército, las fuerzas del orden, la judicatura—, así como la controversia exacerbada y la condena reactiva contra todo ejercicio de memoria.

Cabe la tentación de pensar que nos vamos alejando en lugar de acercarnos al objetivo de la reparación y la verdad histórica, y que, habiendo dejado crecer tantas generaciones sin la enseñanza y reflexión debidas respecto a esta cuestión —trascedente desde el punto de vista moral—, y tolerándose sin réplica por parte de la justicia tantos engaños y mixtificaciones, amparándose tantas vacilaciones y silencios, tantas equidistancias subjetivas, nos va a ser imposible convencer a los jóvenes. Muy difícil resulta cada día, para muchos de ellos, discernir entre verdad y mentira.

En cuanto a los «mitos» políticos de la Transición —versiones interesadas que logran imponerse ya al mismo hilo del proceso—, el más persistente ha sido (junto al de su carácter pacífico y no violento) el del papel preeminente de Juan Carlos I entre los actores de la normalización democrática. Es una instrumentalización que se utiliza todavía, actualmente, para contrarrestar una conducta personal nada modélica. Los dos mitos se engarzan, interactivamente, aunque cada uno contiene consecuencias distintas: el del rey demócrata viene a aminsonar el papel de cuantos lucharon desde la calle y la fábrica por la democracia, y el de la no violencia resta importancia a lo que se consiguió, permitiendo una idealización, por contraste, del periodo anterior. A ambas

percepciones, extendidas entre la población de toda edad, contribuyeron sustancialmente durante mucho tiempo los medios de comunicación de toda impronta y, por encima de ellos, los dos grandes partidos.

¿Crees que debería procurarse introducir una visión más compleja de esos años en el currículum docente preuniversitario?

La clave para abordar esa complejidad estaría en la educación secundaria. Pero en estos momentos, y en manos de unas autonomías masivamente gobernadas por el Partido Popular, lo veo tarea muy difícil si no imposible, incluso si no influyera tanto como influye VOX en las proyecciones culturales y, muy seguramente, en las decisiones sobre la elaboración de los programas docentes.

Por lo demás —y sé que esto puede resultar más injusto aún que impopular—, me cabe la sospecha de que, durante muchos años, una parte sustantiva de quienes han venido explicando los contenidos de historia reciente española, muy apretados y desvaídos por lo general, o bien no los resuelven acertadamente por propia convicción, o algo falla en ciertos centros más allá de su propia actuación. Los programas son, en cualquier caso, insuficientes. Quizá el uso indiscriminado de las redes lo gobierna ya todo, pero lo cierto es que, hablando en términos generales y por lo que a mí me llega, lejos de haberse avanzado en un conocimiento justo y medido de nuestro durísimo pasado, se ha retrocedido hasta dejar crecer tantas y tantas opiniones benévolas del franquismo, para olvidar —o negar incluso— el conflicto fratricida que lo precedió y sus inmensos costes.

Con todo, tratando de superar mi pesimismo —o precisamente por él—, sí que creo necesario insistir en el factor educativo y reforzarlo. Los profesores de secun-



Desmontaje de estatua de Franco, en Valencia, 1983 (Agencia EFE, AHPCE).

daria tienen un reto nada irrelevante en este asunto, y por ello creo que se les debe ofrecer todo el apoyo y acompañamiento,

estímulo y reconocimiento en su tarea en mucho mayor grado del que, en su mayoría, reciben hoy.